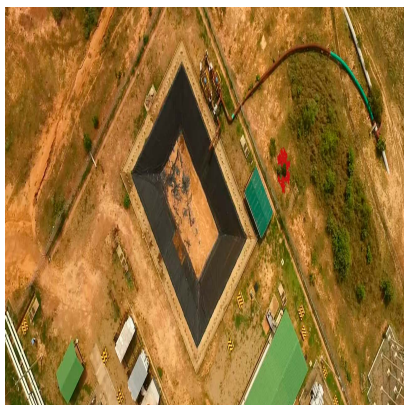




La rep blica independiente de Pacific Rubiales

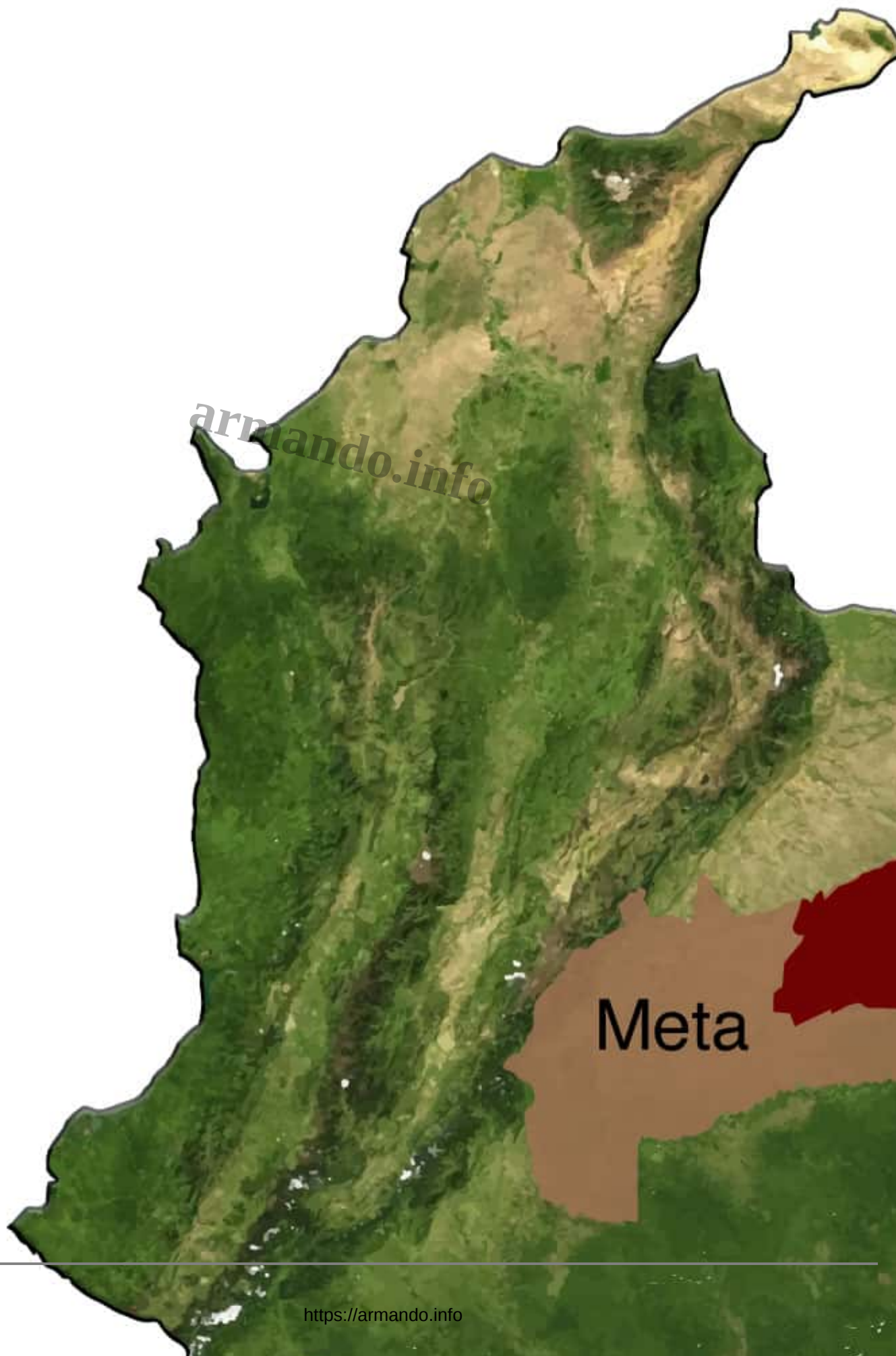
Descripci n

Un aviso en la entrada del complejo petrolero de Rubiales, Quifa y Piriri se ala que los visitantes est n entrando a un pedazo de Canad  en Colombia. Pacific Rubiales, la empresa que se vend a en Colombia como una multinacional canadiense, puso el aviso en el 2008, [cuando asumi  los derechos de explotaci n petrolera en esta regi n de los Llanos Orientales colombianos](#). Durante los ocho a os de administraci n de los campos, la compa  a acumul  en esta zona al menos 26 fincas que suman aproximadamente 55 mil hect reas, a trav s de varias de sus empresas.

El principal campo petrolero se encuentra ubicado en medio de lo que se conoce como la Altillanura, una extensa planicie que se extiende desde el r o Orinoco, en la frontera con Venezuela, hasta cerca del piedemonte de la cordillera de los Andes. Son alrededor de 13 millones de hect reas que representan aproximadamente el 10% de Colombia, en la que habitan menos de 500 mil personas. La vereda de Rubiales ocupa 3% de ese amplio territorio y junto a los pozos viven casi 800 campesinos, seg n un censo realizado por la Junta de Acci n Comunal; las 55 mil hect reas que son propiedad de la compa  a petrolera representan una porci n infinitesimal de toda esta tierra, y, sin embargo, sus habitantes viven como en una rep blica independiente, con la petrolera como  nico gobierno: ejercen el papel de administradores de la seguridad y de los servicios p blicos como la electricidad y el agua.

As  sigue siendo desde que [Catalyst Capital Group adquiri  Pacific Rubiales](#), la compa  a en 2016 entreg  el pozo Rubiales a la petrolera estatal colombiana Ecopetrol y la nueva empresa pas  a llamarse en 2017 Frontera Energy. Aunque en Puerto Gait n se explota petr leo desde hace 35 a os, y la administraci n municipal lleg  a recibir hasta 250 mil millones de pesos en regal as -- unos 80 millones de d lares--, el 95.5% de los habitantes de su zona rural viven en la pobreza, seg n un informe de la Gobernaci n del Meta presentado en el 2016.

La precariedad de la vereda Rubiales se hace evidente en las primeras casas que se ven al llegar a la zona: peque as construcciones de madera te idas por el polvo rojo de la carretera, con habitaciones que por puertas tienen s banas; muchas de esas casas sin sanitarios ni redes el ctricas. La luz el ctrica llega a Rubiales solo unas horas al d a y el acceso al agua para el consumo llega por medio de carrotanques que la distribuyen a diario.



A los campos petroleros de la vereda Rubiales se llega luego de recorrer 160 kilómetros desde el casco urbano del municipio de Puerto Gaitán. Un tramo que no debería tomar más de tres horas tarda más de cinco por las malas condiciones de la carretera sin asfaltar.

La sabana en la que se encuentran los campos petroleros de Rubiales, Piriri y Quifa, que ahora ocupan los paisajes y algunas pequeñas zonas de bosque que durante siglos estuvieron despejados, ha sido durante siglos el hogar de comunidades indígenas, sikuanis, piapocos, sávilas que han habitado durante 1500 años esta llanura que comparten Colombia y Venezuela. En la actualidad sobreviven comunidades de la etnia sikuani en la vereda Rubiales. Armando Info y Rutas del Conflicto intentaron hablar con algunos de sus líderes, pero no quisieron dar declaraciones sobre si la explotación de crudo y las políticas de las empresas petroleras han afectado su modo de vida.

En las últimas seis décadas, estas tierras se convirtieron en el refugio de campesinos que han huido de la violencia de diferentes zonas de Colombia, principalmente de la costa y Los Andes, con la esperanza de poseer un pedazo de tierra que les permita salir de la pobreza.

Desde tiempos coloniales, se consideraba a esta una tierra sin mucho valor, debido a las difíciles condiciones climáticas y a la baja fertilidad de los suelos, que apenas era apta para la ganadería extensiva. Y así lo fue hasta mediados de la primera década del siglo XXI, cuando llegaron a la región grandes empresas agroindustriales y petroleras, entre ellas Pacífic.

El metal blanco de la tubería y la maquinaria petrolera rompen la uniformidad del paisaje de la extensa sabana que no parece tener fin en el horizonte. Taladros de extracción, plantas de tratamiento de aguas residuales, inmensas redes de tubería, torres eléctricas, contenedores que sirven de hogar para los obreros y pequeños edificios reservados para los ingenieros, es lo que ha sustituido en la vereda Rubiales al paisaje ganadero característico de los Llanos Orientales. Los enormes pastizales desaparecen alrededor de las instalaciones de extracción de crudo y un amplio cultivo de palma aceitera parece, desde el aire, una alfombra tejida con precisión.

La entrada de la vereda tiene una primera alcabala, un retén militar que controla las entradas y salidas, con personal de seguridad privada de Frontera Energy y dos soldados del Ejército Colombiano.

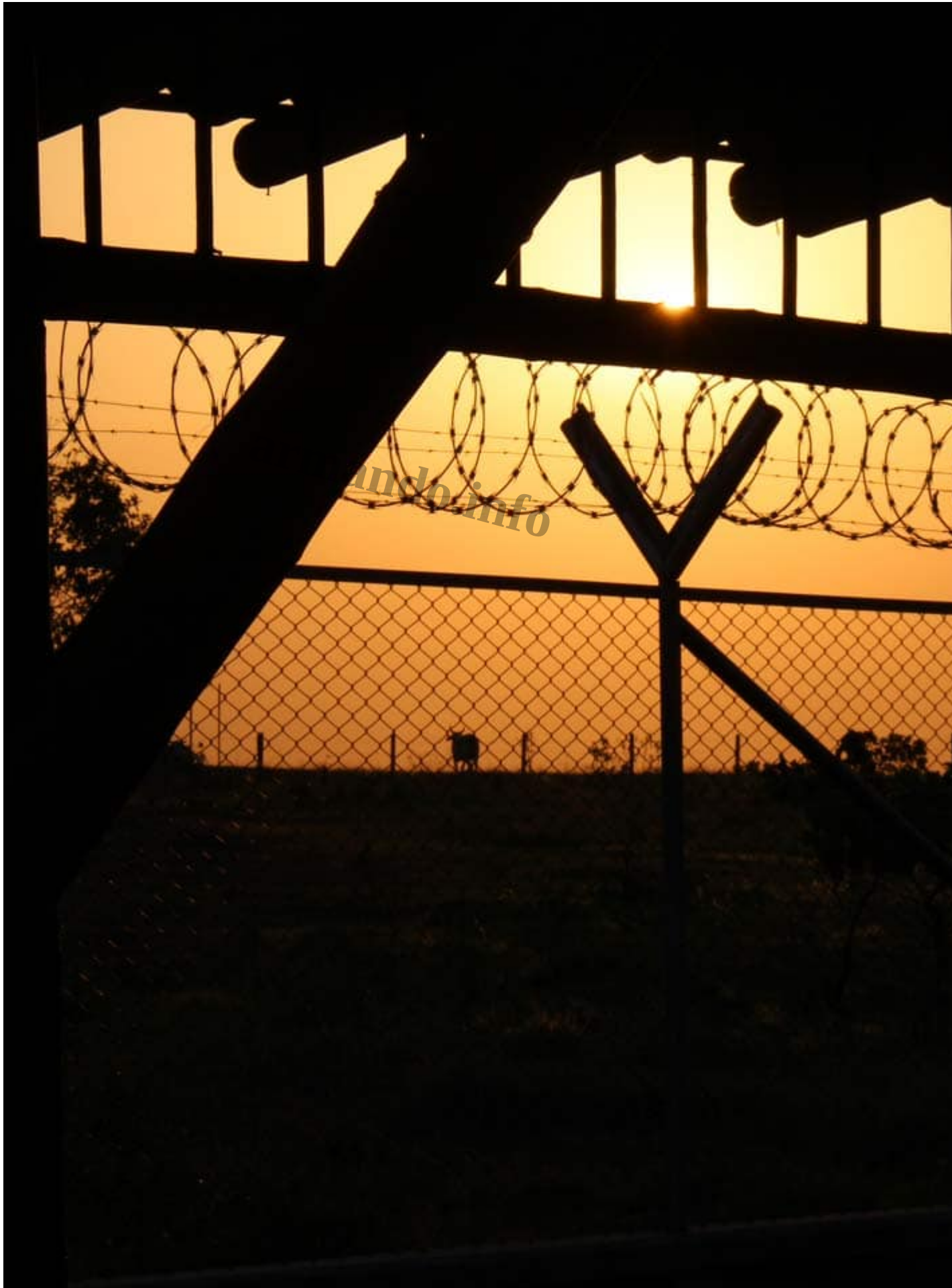


Puesto de control en la entrada de campo Rubiales.

Un conductor que se gana la vida transportando gente desde el pueblo de Puerto Gaitán hasta Rubiales, que pide no ser identificado, cuenta que necesita un permiso especial para entrar. Es un cartón blanco emitido por la empresa, en el que, además de los datos del conductor y el vehículo, también se marcan las infracciones que puedan cometer dentro de la zona petrolera: con tres marcas se pierde para siempre el derecho a ingresar.

Aunque las únicas zonas que permanecen cercadas son los alrededores de infraestructura petrolera, los guardias de seguridad privada controlan la movilidad en toda la vereda. En las carreteras sin pavimento que muestran la tierra rojiza en medio de la infraestructura y los pastizales, abundan los retenes de la seguridad de la empresa.

En el momento en el que lo quieran parar a uno lo paran y lo bajan para requisarlo. A veces montan retenes que yo creo que son ilegales, porque los monta la seguridad privada en una vía pública, dice Hector Sánchez, líder sindical de los trabajadores de la petrolera y habitante de la vereda.



Atardecer dentro de la instalación petrolera

Aunque los caminos de la vereda Rubiales son vías públicas, los guardias de seguridad pueden negar el tránsito, como lo hicieron en noviembre de 2012 con Alexander López, congresista por el Polo Democrático, y miembros de la Unión Sindical Obrera (USO). La comunidad ha denunciado la ilegalidad del retén, pero sigue funcionando bajo el argumento de que Frontera Energy tiene derecho a cuidar su infraestructura.

“El asunto es que ellos están aquí es para cuidar a la empresa, para cuidar la tubería, no para cuidar a los campesinos, a la gente de la vereda”, explica Héctor Sánchez.

Desde 2003 existe una fuerte presencia de militares y policías en la zona, luego de que el gobierno de Álvaro Uribe creara batallones exclusivos para cuidar las inversiones petroleras. En ese momento el campo Rubiales estaba en manos de Meta Petroleum, una empresa creada por el empresario brasileño Germán Efromovich.

En un fragmento no publicado de una entrevista concedida al portal colombiano Verdad Abierta en 2011, Efromovich aseguró que en ese momento contaba con 600 hombres del Ejército y un grupo de 30 asesores de seguridad extranjeros para cuidar el campo petrolero. Aunque la violencia en la zona disminuyó desde 2005, época en la que las FARC abandonaron la zona frente a la presión del Ejército y los paramilitares, la presencia de soldados y policías continuó aumentando: incluso en 2011 el gobierno de Juan Manuel Santos instaló un batallón del Ejército completo en la zona.

La tensión entre los habitantes de la vereda y la petrolera por el control de la movilidad se agravó en julio de 2011, cuando la compañía Pacific Rubiales no adivinaba todavía su declive. Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ese mes casi 7000 trabajadores contratistas de campo Rubiales hicieron un paro para exigir un cambio en sus condiciones laborales, mejoras en los salarios y alimentación, pago de horas extras y más días de descanso.

Como respuesta, a Rubiales llegó el escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional, ESMAD, que se enfrentó a los manifestantes, dejando seis policías y 13 civiles heridos. Aunque después de casi un mes de protestas la empresa accedió a mejorar las condiciones laborales, las tensiones no pararon.

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo denunció que alrededor de 500 trabajadores fueron despedidos de Campo Rubiales entre junio y septiembre de 2011. Además, el gobierno militarizó el campo. “Casi había un soldado y un policía por cada trabajador, la gente estaba amedrentada”, cuenta Héctor Sánchez.



CORDIAL SALUDO AL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META Y SUS ALREDEDORES

LAS AUTODEFENSAS DEL ESTADO MAYOR DEL BLOQUE M-V-J LES DA UN CORDIAL SALUDO

LAS CUALES HACEN PRESENCIA EN DICHO MUNICIPIO A PETICION DE LA MISMA POBLACION RURAL Y URBANA.

Los cuales han venido siendo atropellados por grupos delincuenciales, extorsionistas, líderes sindicalistas, ambientalistas y líderes comunales tales como HECTOR SANCHEZ GOMEZ al cual le damos 24 horas para que desocupe el Municipio ya que lo tenemos ubicado y será desterrado.

Aquellos que estén haciendo daño a nuestra región serán declarados objetivo militar.

ATT- COMANDANTE DEL BLOQUE M-V-J



Panfleto entregado a H ctor S nchez

A partir de ese momento la presi n por parte de la fuerza p blica y la presi n de la petrolera aumentaron. Pacific acus  de secuestro, ante la Fiscal a colombiana, a tres de los trabajadores que hab an organizado las protestas, ya que durante el paro retuvieron personal administrativo de la empresa. H ctor S nchez pas  dos meses en la c rcel, pero qued  libre luego de que un juez determinara que no se trat  de un secuestro. Desde entonces ha recibido amenazas de grupos armados que se autodenominan paramilitares, en la que le dicen que se vaya de la zona.

La militarizaci n y los controles de la empresa de seguridad privada de Pacific aumentaron despu s de las protestas, y terminaron haciendo que, no solo los trabajadores sino tambi n los campesinos, se sintieran inconformes con la empresa. En 2011, los habitantes de la vereda dejaron de firmar contratos para que Pacific Rubiales instalara infraestructura petrolera en sus fincas. Tambi n empezaron los problemas con los campesinos que alegaban derecho sobre la tierra que fue acumulando la petrolera.

Evaristo Urrea es un campesino que ocupa una finca de m s de mil hect reas en medio de las propiedades que pasaron a manos de Frontera Energy desde que Catalyst Enterprise adquiri  Pacific Rubiales en 2015. Dice Urrea que la petrolera le hizo ofertas para que permitiera instalar un oleoducto en su tierra, pero  l nunca lo permiti , porque considera que el dinero no compensa lo que estaba entregando si acced a a las propuestas.

El campesino vive de la cr a de ganado y su finca marca un inmenso parche de sabana sin oleoductos, ni taladros de extracci n, ni ninguna otra maquinaria petrolera. Urrea se ala que con el tiempo la gente se fue dando cuenta de que la petrolera solo â les trajo problemasâ  y cuando reclamaron a Pacific Rubiales por la contaminaci n ambiental, los excesivos controles y las malas condiciones laborales, solo recibieron presi n.

En mayo de 2016, Urrea form  parte de una comisi n de vecinos de la comunidad que verificar  el estado ambiental de la vereda de Rubiales. En la operaci n de venta, Pacific Rubiales hab a entregado el pozo m s grande, con el mismo nombre, a la estatal Ecopetrol. El mismo d a en el que que la comisi n comenz  a trabajar, Urrea recib  un panfleto en el que un supuesto grupo paramilitar lo amenazaba de muerte.

Hasta el momento nadie sabe con certeza de d nde vienen estas amenazas; lo cierto es que la situaci n no parece mejorar con la presencia de Ecopetrol en el campo.

Los vecinos de la vereda de Rubiales se est n quedando sin agua. Cuando Jos  Barrag n lleg  al predio La Florida, toda el agua que su familia, animales y cultivos necesitaban proven a de peque os nacederos o vertientes del R o Tillav j. Despu s de un tiempo empez  a ver c mo los sedimentos eran arrastrados por el r o y c mo los nacederos guardaban el agua cada vez m s profunda, lo que les impide el consumo de las aguas que antes eran superficiales.

Jos  Barrag n, y las casi 200 personas que asistieron a una audiencia ambiental celebrada el 8 de abril de 2017, culpan a las empresas petroleras de desaparecer y contaminar sus fuentes h dricas.

Además, afirman que el hecho de que el agua esté cada vez más profunda se debe a que la extracción provoca temblores diarios que la hundan cada vez más.

"Cuando nosotros llegamos vivamos bien, tengamos agua, habíamos comida, pero cuando llegó la petrolera se acabó todo", dijo Barragán.

Según la Red Sismológica Nacional y el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entre 1999 y 2013 hubo en Puerto Gaitán 11 temblores. Entre abril de 2013 y junio de 2016, hubo 976. Casi uno por día. Sin embargo, ninguna entidad oficial de control ha encontrado coincidencia entre la actividad sísmica inusual y la producción de petróleo.

El informe ["El Costo Humano del Petróleo"](#), de las ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Federación Interamericana de Derechos Humanos, afirma que por cada barril de crudo que se produce en Rubiales se generan unos 20 de aguas residuales. Esta agua, que por su tratamiento químico deja de ser apta para el consumo de humanos y animales, termina siendo vertida en Caño Rubiales, la principal fuente hídrica de esta vereda. Es decir: diariamente se vierten miles de litros de agua contaminada a una de las principales fuentes de aguas limpias de la zona. Exactamente 110.42 litros por segundo en cinco puntos.

Ecopetrol tiene la pretensión de aumentar esa capacidad al doble y habilitar un punto más de vertimiento, como lo planteó en la misma audiencia ambiental de abril. En caso de que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorice esta modificación, incluso en contra de los deseos de la comunidad, en Caño Rubiales se empezarán a verter más de mil litros de agua residual por segundo.

El tratamiento de estas aguas está, actualmente, a cargo de Ecopetrol. Sin embargo, la empresa colombiana firmó contratos con Agrocascada, una filial de Pacific Rubiales, para hacer pruebas de arranque de una nueva planta de aguas residuales. [Según una auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación en 2015](#), estos contratos incluyen construcción de infraestructura que no es de ninguna utilidad para la operación de Campo Rubiales.

La misma auditoría reveló que estas acciones generaron un detrimento patrimonial por casi 50 mil millones de dólares a favor de la entonces Pacific Rubiales y ningún beneficio para Ecopetrol. Denuncia, además, que recursos estatales fueron usados en pro de un particular, Agrocascada y que, después de tres años del inicio de las inversiones, el proyecto no genera ningún valor agregado a Campo Rubiales, ya que ni siquiera está en funcionamiento.

ArmandoInfo y Rutas del Conflicto consultaron a Frontera Energy sobre la actividad de Agrocascada en Rubiales, la empresa respondió que "el proyecto Agrocascada se encuentra en etapa preoperativa, es decir, aún no ha entrado en funcionamiento". Ecopetrol, por su parte, hizo referencia a los contratos celebrados para las pruebas de arranque, sin embargo se abstuvo de dar más información amparándose en el secreto industrial y comercial.

Los habitantes que asistieron a la audiencia ambiental insisten en que el petróleo no les ha traído nada bueno y que los únicos beneficiados con la explotación de crudo fueron las empresas.

Aparte de las instalaciones del colegio en la vereda Rubiales, muchos campesinos insisten en que no han ganado nada después de 35 años de explotación petrolera: siguen sin los documentos de la titularidad de sus tierras, viviendo en sus casas de madera teñidas con el rojo que se levanta de los caminos sin pavimentar y con agua que ya no viene de los ríos sino de carro tanques.

Fecha de creación

2017/08/24

armando.info